

Santiago, veinte de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

En estos autos RIT O-362-2019, RUC 1940017269-0, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, caratulados “Riffo y Otra con Fisco de Chile”, por sentencia de uno de julio de dos mil diecinueve, se desestimaron las excepciones opuestas y se acogió la demanda solo en cuanto se declaró la existencia de relación laboral y el despido carente de causal, y se la rechazó en cuanto se pretendía la nulidad del despido y el cobro de cotizaciones previsionales y de seguridad social en favor de los actores.

La parte demandante, en lo que interesa, dedujo recurso de nulidad en el que invocó de modo principal la causal establecida en el artículo 478 letra e), alegando infracción del artículo 479 N°5, en conjunto con la del artículo 477, por conculcación a los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 162, y, en subsidio, la del artículo 477, por infracción a los incisos 5 y 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, que fue rechazado por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

Respecto de dicho fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, para que esta Corte lo acoja y dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que el recurrente solicita se unifique la jurisprudencia a fin que se determine la correcta aplicación de la sanción establecida en el artículo 162 incisos 5°, 6°, y 7° del Código del Trabajo, y se ordene el pago de las cotizaciones de seguridad social en su totalidad, cuando en la sentencia se ha declarado la existencia de la relación laboral.



Reprocha que la decisión se haya apartado de la doctrina contenida en las sentencias que ofrece para su cotejo, esto es, las pronunciadas por esta Corte en los antecedentes rolol de ingreso 45.842-2016, 100.836-2016 y 381-2017, referidos a situaciones análogas, de las que se desprende que el hecho que sea la sentencia la que declara la relación laboral existente entre las partes es solo una consecuencia de haberse resistido la demandada a cumplir con las obligaciones que la legislación laboral le impone, sin que el derecho pueda amparar situaciones en las cuales se exonere al empleador de sus obligaciones laborales por el simple argumento de que para él la relación siempre fue civil a honorarios, en particular, atendida la naturaleza declarativa, y no constitutiva, del fallo que reconoce el carácter laboral de la contratación, lo que supone que al constatarse el incumplimiento de la obligación previsional, se está frente a una carga que se encontraba vigente desde que se inició la relación laboral y no desde que se le calificó de tal, por lo que se configuran los presupuestos de la sanción establecida en el inciso 5º y 7º del artículo 162 del Código del Trabajo.

Tercero: Que atendida la forma en que el legislador concibió el recurso en estudio, para alterar la orientación jurisprudencial acerca de alguna determinada materia de derecho “objeto del juicio”, es menester la concurrencia de, al menos, dos sentencias que sustenten distintas líneas de razonamientos al decidir litigios de idéntica naturaleza. De esta manera, no se aviene con la naturaleza jurídica del recurso en análisis intentar oponer a una directriz jurisprudencial fallos que ponen fin a un conflicto suscitado sobre la base de hechos o consideraciones distintas a los establecidas, en el ámbito de acciones diferentes, lo que supone, necesariamente, la presencia de elementos disímiles, y, por ende, no susceptibles de equipararse o de ser tratados jurídicamente de igual forma.

Cuarto: Que, para efectos del análisis del recurso, se debe indicar que la sentencia de base dio por establecida la existencia de relación laboral y el despido indebido, pero rechazó disponer el pago de cotizaciones previsionales y la aplicación de la sanción de nulidad del despido, al estimar que la misma tiene carácter constitutivo de la relación laboral, desde que, en forma previa, no asistió a la demandada la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud, por lo que la sanción asociada a su no pago, contenida en los incisos 5 y 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, y que corresponde al empleador contumaz, debe interpretarse de modo restrictivo, no alcanzando al caso en estudio.



En tanto que la que se impugna, desestimó los motivos de nulidad deducidos, sosteniendo, en primer término, que las causales invocadas de modo principal y en conjunto deben ser rechazadas, por cuanto no puede sostenerse al mismo tiempo que la sentencia omitió pronunciarse y que el pronunciamiento emitido es errado; y respecto de la causal subsidiaria, fundó su rechazo en que por tratarse de un órgano del Estado, concurre un elemento que permite diferenciar la aplicación de la aludida institución, por haberse suscrito los contratos al amparo de un estatuto legal que otorgaba presunción de legalidad, excluyendo la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que justifica la gravosa punición del inciso 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, lo que obsta a la procedencia de la sanción prevista en el inciso séptimo de la misma norma, concordando en general con lo que dispuso el sentenciador del grado, y disintiendo con la regla general dispuesta por la Corte en cuanto a la procedencia de dicha sanción, por los motivos anotados.

Quinto: Que el recurrente ofreció para efectos del cotejo respecto de la impugnada, tres pronunciamientos previos que fueron emitidos por esta Corte en los antecedentes rol de ingreso 45.842-2016, 100.836-2016 y 381-2017.

El primero y el tercero, que declararon la procedencia de la sanción de nulidad del despido respecto de los municipios, en cada caso, demandados, analizaron en idénticos términos el contenido de los artículos 58 y 162 del Código del Trabajo, así como su finalidad, concluyendo que la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, que es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde sufragar, dentro del plazo que la ley fija. De manera que la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos y al no cumplir con esta exigencia se hace acreedor de la sanción establecida en el artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, del Código del Trabajo. Además de destacar que la sentencia definitiva no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, pues sólo constata una situación preexistente.



El segundo, pronunciado en el contexto de un juicio seguido en contra del Fisco de Chile, plantea que si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional, corresponde imponerle la sanción contemplada en los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, independiente de que haya retenido o no de las remuneraciones del actor las cotizaciones pertinentes, pues el presupuesto fáctico que hace aplicable tal punición, se configura por su no entero en los órganos respectivos en tiempo y forma.

Sexto: Que, como se observa, tales dictámenes dan cuenta de la dispersión doctrinaria que exige el recurso para su procedencia por lo que corresponde determinar el criterio sostenido por los tribunales superiores de justicia que debe prevalecer, para lo cual se hace presente que, pese a que la recurrente lo interpone y desarrolla como si se tratara de una sola materia jurídica, en realidad incorpora dos aspectos, que esta Corte resolverá en forma separada e independiente.

Séptimo: Que, según lo indicado, se propone y solicita la unificación respecto del pago de cotizaciones previsionales y de salud de los actores, cuando es la sentencia la que ha calificado de relación laboral la habida entre las partes.

A este respecto, tal como lo señaló el abogado de la parte recurrida en su intervención en estrado, la sentencia impugnada no contiene pronunciamiento respecto de dicha materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia, desde que las causales invocadas de modo principal, que atendían precisamente a la decisión del sentenciador del grado que no dio lugar a su entero y pago, fueron desechadas por una razón de forma, esto es, por haberse interpuesto conjuntamente causales que generan decisiones incompatibles, sin haberse emitido un juicio respecto del fondo de la cuestión debatida.

Octavo: Que, en atención a lo expuesto, no existiendo una decisión de un tribunal superior de justicia que contrastar, requisito *sine qua non* para la procedencia del arbitrio, se lo debe rechazar.

Noveno: Que, luego, en lo que concierne a la procedencia de aplicar la sanción establecida en los incisos quinto y siguientes del artículo 162 del código del ramo, cuando la relación laboral entre un particular y la Administración del Estado ha sido establecida mediante una sentencia judicial, materia en que también se verifica la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia que conduce a



determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta, resulta útil expresar que la materia objeto de la litis ya fue conocida por esta Corte según dan cuenta sentencias dictadas en las causas roles números 4.1500-2017; 37.339-2017; 36.601-2017 y últimamente en los roles 28.229-2018, 32.749-2018, 4.440-2019, 1.403-2020, 1.409-2020 y N°42.863-2020, entre otras, en las que se unificó la jurisprudencia en el sentido que, tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Décimo: Que, en otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y en conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se declara que **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el de nulidad deducido en contra de la de uno de julio de dos mil diecinueve, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, en autos RIT O-362-2019, RUC 1940017269-0.

Acordada con el **voto en contra** de la ministra señora Chevesich, quien fue de opinión de acoger el recurso, dictar sentencia de reemplazo que haga lugar al recurso de nulidad, y, consecuencialmente, se condene a la demandada a las prestaciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, atendidas las siguientes argumentaciones:



1º.- Que la controversia se centra en determinar la procedencia de aplicar la sanción prevista en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo, al caso de autos, en que la relación habida entre los litigantes ha sido calificada de naturaleza laboral sólo en el fallo del grado. Al respecto, cabe señalar que con la modificación introducida por la Ley N° 19.631, de 1999, al artículo 162 del Código del Trabajo, se impuso al empleador una obligación adicional, esto es, que para proceder al despido de un trabajador, deben encontrarse íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario dicho despido carece de efectos, es nulo.

2º.- Que, en este contexto, conforme a lo razonado en la sentencia de base, el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, de modo que corresponde aplicarle la sanción que la misma contempla, esto es, el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la de su convalidación, mediante el entero de las cotizaciones adeudadas, desde que el fallo recurrido de nulidad, que dio por establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, sólo viene a declarar o constatar un hecho preexistente –relación laboral- y del cual emanan todas las obligaciones y derechos que el ordenamiento jurídico contempla en esta materia, por lo que al no decidirse así en la sentencia impugnada se ha hecho una errada interpretación y aplicación de la normativa en estudio, por lo que correspondía acoger el motivo de la causal de nulidad contemplado en el artículo 477 del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvanse.

Rol N° 2.819-2020

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Angélica Cecilia Repetto G., ministro suplente señor Mario Gómez M., y la abogada integrante señora Leonor Etcheberry C. No firma el ministro suplente señor Gómez, obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, veinte de agosto de dos mil veintiuno.





En Santiago, a veinte de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

